

Santiago, veintiséis de diciembre de dos mil veintitrés.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el abogado don Sebastián Avendaño Farfán, en representación de don Adán Pareja Bernal, demandante en autos sobre cumplimiento de la sentencia que acogió la demanda de indemnización de perjuicios por enfermedad profesional, Rit C-15-2019, seguidos ante el Juzgado de Letras de Constitución, recurre de queja en contra de los miembros de una sala de la Corte de Apelaciones de Talca, ministros señores Moisés Muñoz Concha y Carlos Carrillo González y del abogado integrante señor Rodrigo de la Vega Parra, quienes con fecha 28 de agosto de 2023, revocaron la resolución apelada y acogieron un incidente de nulidad de lo obrado, invalidando lo actuado en el proceso respecto de la demandada Sociedad Inversiones Costa Verde SpA, antes de razón social Inmobiliaria e Inversiones Costa Verde Limitada.

Manifiesta que la decisión objetada fue pronunciada con falta o abuso grave, al conculcar instituciones tales como la cosa juzgada, la preclusión procesal, el desasimiento y, en definitiva, la garantía del debido proceso, al ir en contra de dos resoluciones judiciales firmes, esto es, la sentencia definitiva dictada el 3 de junio de 2019, que acogió la demanda y condenó a Inmobiliaria e Inversiones Costa Verde Limitada al pago de la indemnización que indica, y la de 27 de octubre de 2020, pronunciada por la misma Corte de Apelaciones de Talca, que confirmó la interlocutoria de 7 de agosto de 2019, que rechazó el incidente de nulidad de lo obrado promovido por esa demandada, en razón de los mismos argumentos que motivan la incidencia que, esta vez, fue acogida.

Da cuenta de lo obrado en causa Rit O-6-2019, seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Constitución, que hizo lugar a la demanda de indemnización de perjuicios planteada por el actor en contra de Inmobiliaria e Inversiones Costa Verde Limitada y de Maderera Forestal Bruna Limitada, cada una condenada al pago de los montos que se indican por concepto de daño moral.

Destaca que la actual demandada, debidamente notificada, no compareció al proceso, y que sólo lo hizo después del fallo, con fecha 22 de julio de 2019,



formulando un incidente de nulidad de todo lo obrado, que fue rechazado por la judicatura de primer grado, decisión confirmada con fecha 27 de octubre de 2020.

Añade que, en paralelo, la misma demandada interpuso el mismo incidente en la causa donde se había iniciado el procedimiento de cumplimiento de la sentencia, los actuales autos Rit C-15-2019, en la que el tribunal nuevamente desestimó sus argumentos, resolución posteriormente revocada por los recurridos.

Solicita se acoja el recurso, se deje sin efecto la resolución impugnada y se dicte una que confirme la de primer grado que rechazó el incidente.

Segundo: Que, al evacuar el informe de rigor, los recurridos señalaron que efectivamente con fecha 28 de agosto de 2023 dictaron la decisión que declaró nulo todo lo obrado en los autos Rit C-15-2019 del Juzgado de Letras de Constitución, en lo que respecta a la parte Sociedad Inversiones Costa Verde Spa, antes de razón social Inmobiliaria e Inversiones Costa Verde Limitada, fundado en que tales sociedades son distintas a la empleadora demandada en autos; conclusión a la que se arribó tras el examen del historial societario como también del giro o actividades económicas de aquellas, lo que condujo a estimar que el proceso en cuestión no tuvo existencia jurídica al carecer de demandado, motivo por el que todo lo actuado es ficticio y no puede producir los efectos de cosa juzgada, preclusión procesal, desasimio del tribunal, ni menos aún afectar al derecho a un debido proceso, que son aquellas faltas denunciadas por el recurrente; por lo que consideran que no se incurrió en falta o abuso.

Tercero: Que el recurso de queja está reglado en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, denominado “De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales”, y su párrafo primero, intitulado de “Las facultades disciplinarias”, contiene el artículo 545 que lo consagra como un medio de impugnación que tiene por exclusiva finalidad corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de sentencias definitivas e interlocutorias que ponga fin al juicio o haga imposible su continuación, que no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario.



Cuarto: Que de estos antecedentes y de los que aparecen en el sistema computacional, correspondientes a la causa antes señalada, se desprenden los siguientes hechos:

a.- Con fecha 28 de enero de 2019, don Adán Humberto Pareja Bernal interpuso demanda de indemnización de perjuicios por enfermedad profesional en contra de Inmobiliaria e Inversiones Costa Verde Limitada (ex-Forestal Copihue S.A.), R.U.T. 96.606.210-K, representada por don José Ignacio Montes Ariztía, entre otras demandadas, dando origen a causa Rit O-6-2019, seguida ante el Juzgado de Letras de Constitución.

b.- El 3 de junio de 2019, se dictó sentencia en los referidos autos, en la que se dejó constancia de la rebeldía de Inmobiliaria e Inversiones Costa Verde Limitada y, sobre la base de las consideraciones que se indican, se acogió la demanda, y, en lo que interesa, se la condenó al pago de una indemnización por daño moral de \$28.003.697. Con fecha 24 de junio de 2019, se certificó su ejecutoria.

c.- El 22 de julio de 2019, la demandada sociedad Inversiones Costa Verde SpA. -que antes giraba bajo la razón social de Inmobiliaria e Inversiones Costa Verde Limitada, con Rol Único Tributario N° 96.606.210-K- compareció en la citada causa Rit O-6-2019 e interpuso recurso de nulidad de lo obrado, fundado en la existencia de un error consistente en la identidad de la persona objeto de la demanda.

Señaló que la demandada Forestal Copihue S.A. se dividió, constituyéndose a partir de ella una sociedad denominada Bosques de Chile S.A., a su vez, disuelta el 3 de enero del 2006, continuando como Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Costa Verde Limitada, la no tiene ninguna conexión con la incidentista.

Sostuvo que, si bien existe una similitud entre el nombre de la razón social con aquella que se pretende emplazar, su parte no es ni ha sido continuadora legal de Bosques de Chile S.A., ni tampoco de Forestal Copihue S.A., así como nunca ha tenido vinculación con dichas razones sociales ni con el demandante de autos.



d.- Por resolución de 7 de agosto de 2019, el Juzgado de Letras de Constitución rechazó la incidencia, por cuanto *“pese a estar válidamente notificada, la demandada Inmobiliaria e Inversiones Costa Verde Limitada, no ejerció ninguna acción tendiente a desvirtuar la pretensión del actor, ya sea mediante la nulidad procesal que recién ahora intenta, la interposición de excepciones, o bien, atacando el fondo de la acción entablada, hecho que conllevó a la preclusión de su derecho para oponer la excepción que ahora intenta, en relación a lo dispuesto en el artículo 452 del Código del Trabajo, y que conllevó a la aplicación del apercibimiento dispuesto en el artículo 454 N° 3 de dicho cuerpo normativo, como se declarase en el acápite décimo cuarto de la sentencia de autos. Por otra parte, y habiendo sido notificada la sentencia de autos con fecha 03 de junio del presente - en atención al artículo 457 del Código del Trabajo - tampoco concurrió la demandada a recurrir por vía de nulidad la sentencia dictada en autos de conformidad al artículo 477 del mismo cuerpo legal, instancia en la que por lo demás, pudo perfectamente haber alegado la infracción al procedimiento que ahora intenta, hecho que condujo a que se certificase con fecha 24 de junio del 2019 la ejecutoriedad de la misma, impidiendo a este sentenciador, modificar lo considerado en ella en base a lo dispuesto por el artículo 182 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 432 del Código del Trabajo”*.

A partir de esos razonamientos, se concluyó que la demandada Inmobiliaria e Inversiones Costa Verde Limitada tuvo una actitud rebelde durante la secuela del proceso, resultando su alegación improcedente y extemporánea, motivos que condujeron a rechazar la declaración de nulidad del proceso, así como también la incidencia de inoponibilidad de la sentencia dictada en su contra.

e.- La Corte de Apelaciones de Talca, con fecha 27 de octubre de 2020, confirmó la resolución precedente.

f.- El 4 de julio de 2019, se dio inicio al procedimiento de cumplimiento de la sentencia, liquidando la deuda y ordenando requerir de pago a las demandadas.

El 22 de julio de ese año, misma fecha en que compareció con igual fin en la causa declarativa, la demandada interpuso incidente de nulidad de lo obrado y,



en subsidio, de inoponibilidad de la sentencia; acusando que el proceso adolece de un vicio consistente en error en la persona del legitimado pasivo, por cuanto Inmobiliaria e Inversiones Costa Verde SpA. es un tercero ajeno al juicio, diferente de la continuadora de la ex Forestal Copihue.

g.- Con fecha 17 de noviembre de 2022, tras recibir el incidente a prueba y ponderar los antecedentes ofrecidos por las partes, se desestimó en virtud de razonamientos similares a los expuestos en la causa declarativa, atendido que revisada la causa RIT O-6-2019, que dio origen a los presentes autos, se advierte que la demandada fue notificada válidamente en el domicilio ubicado en Las Esteras Sur 2831, comuna de Quilicura, que coincide con el indicado en los documentos aportados por la incidentista, quedando de manifiesto que la parte tomó conocimiento del proceso laboral antecedente de la causa de cobranza y que adoptó voluntariamente una actitud rebelde, sin reclamar su supuesta falta de legitimación pasiva en la etapa procesal pertinente, por consiguiente *“resulta evidente que la incidentista siempre tuvo cabal conocimiento de la acción laboral impetrada en su contra, lo que se concluye en base a la prueba que aporta la misma articulista, se notificó la demanda y la liquidación del crédito en el mismo domicilio, constando aquella circunstancia además en atestado de ministro de fe, obviar esta circunstancia implicaría que el Tribunal avale un aprovechamiento de su propio dolo o negligencia en perjuicio del Trabajador demandante, a lo que en aplicación del principio pro operario, no es posible permitir”*.

h.- Luego, la resolución impugnada mediante el presente recurso de queja, de fecha 28 de agosto de 2023, revocó la anterior, y, en reemplazo, acogió el incidente de nulidad de lo obrado, invalidando lo actuado en el proceso respecto de la demandada Sociedad Inversiones Costa Verde SpA, antes de razón social Inmobiliaria e Inversiones Costa Verde Limitada.

Para ello, estableció que existen dos sociedades, a saber:

1) Inversiones Costa Verde SpA, antes de razón social “Inmobiliaria e Inversiones Costa Verde Limitada”, RUT 96.606.210-K, con giro de actividades de apoyo a la agricultura, ganadería e inversiones. Los hitos relevantes de la historia corporativa de esta persona jurídica son los siguientes:



a) “Inmobiliaria Costa Verde S.A.” se constituye por escritura pública de fecha 17 de junio de 1991, otorgada ante el Notario Público de Santiago don Jaime Morandé Orrego, inscrita fojas 17.629, número 8.824 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1991.

b) Dicha sociedad se transforma a “Inmobiliaria e Inversiones Costa Verde Limitada” por escritura pública de 15 de junio de 2005, otorgada en la Notaría de Santiago de don Alberto Mozó Aguilar, inscrita Fojas 22.568, N°16.396 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2005.

c) La razón social de la sociedad “Inmobiliaria e Inversiones Costa Verde Limitada” a “Inversiones Costa Verde Limitada” se modificó mediante escritura pública de fecha 29 de junio 2011, otorgada en la Notaría de Santiago de don Alberto Mozó Aguilar, inscrita Fojas 41.270, N°30.641 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2011.

d) La sociedad de responsabilidad limitada se transformó en “Inversiones Costa Verde SpA”, mediante escritura pública de fecha 10 de abril de 2019, otorgada en la Notaria de Patricio Raby Benavente, cuyo extracto se inscribió a fojas 32.480, N°16.245 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2019, y

2) Inmobiliaria e Inversiones Costa Verde Limitada, continuadora legal de “Forestal Copihue S.A.”, RUT 96.669.080-1, con giro de faenas forestales.

Sobre esa base, la Corte concluyó que “Inversiones Costa Verde SpA”, antes de razón social “Inmobiliaria e Inversiones Costa Verde Limitada”, es una sociedad diferente a la empleadora demandada en la causa declarativa, lo que no sólo fluye de su historial societario, sino también de sus giros o actividades económicas, pues, según certificado de consulta tributaria emitido por el Servicio de Impuestos Internos, jamás ha desempeñado faenas forestales, no pudiendo, por ende, ser sujeto pasivo de una acción indemnizatoria, y menos para pretender que indemnice por daños causados en una relación laboral de contexto silvícola, que le es del todo ajena.



Agrega que, no habiendo persona del demandado, no pudo por ende existir juicio y todo lo obrado es sólo aparente, pues, en definitiva, este proceso no tiene realidad jurídica, lo que determina que la sentencia dictada tenga la misma característica de aparente o figurada, por lo que no produjo el efecto de cosa juzgada, puesto que un requisito para ello es el provenir de un verdadero proceso, lo que no sucede en el caso.

Quinto: Que, asimismo, cabe tener presente que el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil declara que *“Se entenderá firme o ejecutoriada una resolución desde que se haya notificado a las partes, si no procede recurso alguno en contra de ella; y, en caso contrario, desde que se notifique el decreto que la mande cumplir, una vez que terminen los recursos deducidos, o desde que transcurran todos los plazos que la ley concede para la interposición de dichos recursos, sin que se hayan hecho valer por las partes. En este último caso, tratándose de sentencias definitivas, certificará el hecho el secretario del tribunal a continuación del fallo, el cual se considerará firme desde este momento, sin más trámites”*, agregando su artículo siguiente que la sentencias firmes o ejecutoriadas producen la acción o excepción de cosa juzgada, lo que determina su inmutabilidad, salvo que se hagan valer nuevos antecedentes, según prevé el artículo 181 del referido cuerpo legal.

Sexto: Que, como lo destacan tanto la decisión pronunciada en la causa declarativa, que por primera vez se pronunció sobre el asunto, como aquella revocada por la impugnada, la demandada fue notificada válidamente en su domicilio, generándose una relación jurídica procesal entre las partes, no obstante lo cual se mantuvo inactiva, incluso una vez que fue puesta en conocimiento de la sentencia condenatoria, por lo que no empleó las herramientas que la legislación le ofrece durante la tramitación de la causa laboral para defenderse de las alegaciones de su contraparte o, en su caso, para impugnar el fallo que declaró su responsabilidad en la enfermedad profesional sufrida por el demandante.

Y si bien examinada la demanda que da origen a esos autos, a la luz del análisis societario efectuado por los recurridos, es posible advertir que el demandante incurre en una desprolijidad al emplazar a la sociedad “Inmobiliaria e



Inversiones Costa Verde Limitada”, que asumió el rol de continuadora legal de Forestal Copihue S.A., pero, individualizándola con el Rol Único Tributario de la actual sociedad “Inmobiliaria e Inversiones Costa Verde SpA” (a partir de la modificación del año 2019), antes “Inmobiliaria e Inversiones Costa Verde Limitada” (modificación de 2005) y originalmente “Inmobiliaria Costa Verde S.A.” (de acuerdo a su constitución de 1991); lo cierto es que, cualquiera sea el caso, como lo afirman las resoluciones que rechazaron la incidencia, en sede declarativa y en primera instancia en sede de cobranza laboral, ello debió ser oportunamente planteado por la parte, lo que no ocurrió; sin que la resolución impugnada esgrima ningún nuevo antecedente que permita ir en contra del efecto propio de un pronunciamiento jurisdiccional firme o ejecutoriado, vulnerando con ello el derecho al debido proceso que la Constitución Política de la República garantiza al recurrente.

Séptimo: Que, en consecuencia, los jueces recurridos al pronunciarse sobre un asunto que ya había sido resuelto, entre las mismas partes, sobre la base de iguales alegaciones y antecedentes, y con idénticas peticiones y tribunales de primera y segunda instancia, en contexto de la causa declarativa que origina el presente procedimiento de cumplimiento, incurrieron en falta o abuso, al transgredir lo dispuesto en las normas antes citadas y en el artículo 462 del Código del Trabajo; pues se modificó una decisión previa, que ya había adquirido el carácter de ejecutoriada, privando al demandante de su derecho a hacer cumplir lo resuelto por una sentencia firme, respecto de una demandada que no interpuso ninguna excepción o defensa oportuna, a fin de discutir su vínculo con el actor.

Por estas consideraciones y conforme lo dispone el artículo 549 del Código Orgánico de Tribunales, **se acoge** el recurso de queja deducido en contra de los ministros de la Corte de Apelaciones de Talca señores Moisés Muñoz Concha y Carlos Carrillo González y del abogado integrante señor Rodrigo de la Vega Parra, por haber dictado la resolución de veintiocho de agosto último, y, en consecuencia, se la deja sin efecto y se decide, conforme lo razonado en este fallo, que se confirma la sentencia interlocutoria de diecisiete de noviembre de dos



mil veintidós, dictada en los autos RIT C-15-2019, caratulados “Pareja con CMPC Maderas S.A.”.

No se ordena pasar estos antecedentes al Tribunal Pleno, por estimarse que no existe mérito suficiente para ello.

Regístrese y devuélvase.

N°210.479-2023.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema por los Ministros señoras Gloria Ana Chevesich R., Andrea Muñoz S., señor Diego Simpertigue L., y los abogados integrantes señor Eduardo Morales R. y señora Leonor Etcheberry C. No firma la Ministra señora Muñoz, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar con feriado legal. Santiago, veintiséis de diciembre de dos mil veintitrés.



En Santiago, a veintiséis de diciembre de dos mil veintitrés, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa. En aquellos documentos en que se visualiza la hora, esta corresponde al horario establecido para Chile Continental.



LEBBXKMXGNR